



## Reportaje

La esquina de Esmeralda con Juan Martínez no es solo un cruce de calles. Para Iquique, es una postal conocida: residenciales, casas de cambio improvisadas, transferencias de dinero, furgones, buses y un flujo humano que sube y baja como marea. Durante años, el llamado Barrio Boliviano funcionó como un punto de encuentro para quienes llegaban desde el altiplano, especialmente para abastecerse en la Zona Franca o continuar viaje hacia la zona central. Pero ese mismo movimiento —constante, masivo, difícil de ordenar— terminó por ofrecer el escenario perfecto para que una organización criminal instalara reglas propias, cobrara “vacunas” y convirtiera el territorio en un engranaje más de una economía ilícita transnacional.

Eso es lo que vuelve a poner sobre la mesa la reciente publicación investigativa de BBCL Investiga, al reconstruir cómo, hacia el segundo semestre de 2021, el Barrio Boliviano ya operaba como centro de operaciones del Tren de Aragua en Iquique y cómo, pese a los golpes policiales y judiciales, el sector arrastra secuelas visibles hasta hoy. El reportaje no parte en la ciudad, sino en la ruta. En la frontera altiplánica —Colchane por el lado chileno, Písiga por el lado boliviano— la crisis migratoria se mezcló con un negocio criminal que, según antecedentes judiciales citados por BioBioChile en investigaciones previas, incluyó control de pasos, cobros, extorsiones y violencia brutal. La lógica de la “plaza” y el dominio territorial, típica de organizaciones de crimen organizado, habría encontrado allí un corredor rentable: gente desesperada, trayectos irregulares, transporte informal y una cadena de intermediarios donde cada eslabón podía ser explotado.



## “La pequeña Bolivia” bajo lupa: el reportaje de BBCL Investiga que reabre debate sobre control territorial, contrabando e inseguridad en Iquique

La investigación de Radio Bío Bío sitúa el punto de quiebre en 2021, cuando el Barrio Boliviano —en torno a Esmeralda con Juan Martínez— pasó de ser un polo de tránsito y comercio a un espacio disputado por el crimen organizado.

En Iquique, la historia se aterriza con nombre y lugar. La investigación sitúa el epicentro en Esmeralda con Juan Martínez, donde llegaban a diario cientos de migrantes que habían cruzado de forma irregular. Algunos buscaban seguir hacia Santiago; otros, sin recursos, quedaban varados y comenzaban a deambular por la ciudad. En ese contexto, describe el reportaje, el Tren de Aragua impuso reglas y castigos: no se trabajaba ni se captaban pasajeros “por fuera” sin pagar. La “vacuna”, en el caso del transporte informal hacia la zona central, se fijaba

por pasajero, instalando una suerte de impuesto criminal que, además de financiar a la organización, consolidaba su control simbólico y práctico del barrio. El punto de inflexión social y mediático que recuerda BBCL Investiga ocurrió el sábado 25 de septiembre de 2021. Una marcha contra la migración ilegal terminó con carpas y pertenencias de extranjeros quemadas en la vía pública, un episodio que recorrió Chile y también medios internacionales, y que expuso de manera cruda la tensión acumulada en la ciudad. En el relato

investigativo, ese momento no se interpreta como una anécdota aislada, sino como la superficie de un fenómeno más complejo: frontera tensionada, institucionalidad sobrepasada, economías informales creciendo y, en paralelo, estructuras criminales capaces de organizar el miedo. El barrio, a partir de ahí, se vuelve escenario de



delitos que muchas veces no llegan a denuncia. Secuestros ligados a extorsiones, ajustes de cuentas y amenazas que se sostienen precisamente porque el temor cancela el

trámite más básico: ir a Carabineros, ir a Fiscalía, dejar constancia. La investigación recoge, además, el pulso cotidiano de quienes trabajan en la calle: el taxista que admite

**Hoy, con la célula desarticulada, persisten incivildades, ventas clandestinas y un dilema de gestión pública: cómo recuperar el barrio sin estigmatizar a una comunidad que lo mantiene vivo.**



que hoy se puede transitar, pero que al caer la tarde se instala otra regla no escrita, la de “mirar con cuidado”, evitar discusiones, no quedarse de más.

La publicación plantea, sin embargo, una diferencia clave entre el ayer y el hoy. En su reconstrucción, la acción policial, del Ministerio Público y de la justicia permitió desarticular las operaciones del crimen organizado en la zona. Pero el barrio no volvió a su estado original: lo que persiste —señala el reportaje— es un foco de incivildades e inseguridad asociado, sobre todo, al comercio ilegal, el contrabando de alimentos y el microtráfico.

A las 18:00, cuando baja el sol, aparecen docenas de vendedores y un mercado de mercancías que va desde productos típicos hasta artículos de origen y trazabilidad difusa. En ese punto, la investigación cruza voces institucionales y gremiales que, aun con matices, coinciden en el diagnóstico de fondo: el Barrio Boliviano sigue siendo un punto neurálgico por su flujo de personas, y ese flujo —sin control suficiente— tiende a atraer mercados ilegales.

Desde la Fiscalía, el fiscal regional suplente Juan Valdés Jeria describe el sector como una zona urbana donde el tránsito de pasajeros desde el extranjero ha motivado históricamente fenómenos delictivos: drogas, delitos contra la propiedad, riñas, contrabando. En su evaluación, la migración irregular potenció esas dinámicas, aunque al momento de la publicación sostiene que no existen investigaciones activas asociadas a crimen organizado en ese punto específico, sin descartar procedimientos que puedan originarse allí. El mensaje, en clave institucional, es doble: el barrio es problemático por definición de contexto, pero no necesariamente por presencia vigente de una



## Reportaje

“estructura” como la que operó en 2021.

El municipio, en tanto, pone el foco en el contrabando y su impacto directo en salud pública. El director de Prevención y Seguridad, Gonzalo Prieto Navarrete, afirma que en 2025 se decomisó un 53% más de alimentos de contrabando que en 2024, enumerando productos de alto riesgo sanitario —huevos, quesos, carnes, arroz, fideos— y vinculando ese flujo con un aumento de enfermedades gastrointestinales que, a su juicio, presiona la atención primaria y urgencias. La cifra funciona como termómetro: si el decomiso crece, es porque el negocio está creciendo o porque hay más fiscalización; en ambos casos, el fenómeno está vivo.

Prieto, además, describe un componente tecnológico y operativo: cerca de 500 cámaras municipales en la vía pública, monitoreo 24/7, coordinación con policías y un sistema espejo para que Carabineros observe imágenes en tiempo real. El planteamiento busca mostrar gestión y capacidad de reacción, pero también revela una realidad incómoda: la vigilancia no reemplaza el control estructural del mercado ilegal, solo permite cortar episodios, desplazar grupos, reaccionar a transacciones.

La Cámara de Comercio de Iquique, representada en el reportaje por Rafael Montes González, propone una lectura histórica del deterioro: la migración ilegal pre y post pandemia alteró la vida cotidiana, cambió horarios, instaló temor y afectó el comercio formal. Para el dirigente, el Barrio Boliviano se formó como área comercial a partir de la llegada de buses desde Bolivia, y el gran quiebre se produjo cuando el comercio ambulante creció al punto de esconder, a su juicio, delitos y desorden. En su perspectiva, la recuperación del barrio pasa por reducir ventas clandestinas y devolver previsibilidad al centro, más que por describir el sector como un “territorio perdido”.

Carabineros, por su parte, entrega una respuesta operacional: patrullajes constantes, presencia mañana y noche, servicios focalizados y trabajo integrado con otras instituciones. El teniente coronel Marcos Estrada Arévalo señala que el despliegue se ajusta a una estrategia diaria de distribución de servicios, con focos como la “línea bancaria” y el Barrio Boliviano, además del refuerzo estival orientado a seguridad y turismo. En la misma línea, se reconoce el uso de personal de civil en procedimientos, una señal



de que la intervención no siempre puede ser visible si pretende ser efectiva. Leído en conjunto, el reportaje de BBCL Investiga instala una pregunta que suele quedar fuera de la discusión inmediata sobre seguridad: **¿qué queda cuando se desarticula una organización criminal, pero persisten las condiciones que facilitaron su instalación?**

La respuesta que sugiere la investigación no es simple, porque el Barrio Boliviano no es un “vacío” a ocupar: es un espacio con actividad económica real, con servicios formales —hoteles, residenciales, remesadoras— y con una comunidad que se mueve por trabajo y comercio. La tensión aparece cuando esa economía convive con una segunda capa: ventas clandestinas, contrabando, microtráfico, incivildades. Y en esa convivencia el Estado suele actuar con herramientas parciales: decomisar, fiscalizar, patrullar, correr

el comercio ambulante una cuadra más allá. Lo que cuesta —y es lo que el reportaje deja flotando— es intervenir la cadena completa: quién financia el contrabando, quién lo transporta, quién lo acopia, quién lo distribuye, quién lo protege.

En otras palabras, la “herencia” que nombra BBCL Investiga no se limita al recuerdo de 2021. Es la persistencia de un barrio con alta circulación, alto valor logístico y baja tolerancia al vacío institucional. Porque cuando la autoridad se retira, el vacío se llena. A veces por el crimen organizado; otras, por mercados informales que crecen hasta convertirse en problema sanitario y de seguridad; y casi siempre por la normalización del riesgo cotidiano, esa frase que se repite como consejo: “se puede pasar, pero con cuidado”.

El reportaje de Radio Bío Bío tiene un mérito periodístico evidente: no se queda solo en la denuncia ni en la postal

del miedo. Conecta tiempos —frontera y ciudad, crisis migratoria y economía informal, captura criminal y secuelas urbanas— y obliga a mirar el Barrio Boliviano como un síntoma. Si en 2021 fue posible imponer “vacunas” y reglas de muerte, fue porque existía un flujo sin control suficiente y una institucionalidad tensionada. Si en 2026 persisten incivildades y contrabando, es porque las mismas fuerzas —tránsito, informalidad, oportunidades de ganancia rápida— siguen empujando desde abajo.

La discusión que abre BBCL Investiga, entonces, no es solo policial. Es urbana, social y económica. Y para Iquique, ciudad puerto y puerta norte, esa discusión es también una advertencia: la seguridad no se recupera únicamente sacando a una banda. Se recupera, sobre todo, cuando el territorio deja de ser rentable para el delito y vuelve a ser previsible para la vida diaria.

